

S E S I Ó N P Ú B L I C A NÚM. 4
O R D I N A R I A
JUEVES 9 DE ENERO DE 2014

En la ciudad de México, Distrito Federal, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos del jueves nueve de enero de dos mil catorce, se reunieron en el Salón de Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para celebrar sesión pública ordinaria, los señores Ministros Presidente Juan N. Silva Meza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alberto Pérez Dayán.

A continuación, el señor Ministro Presidente Silva Meza abrió la sesión y el secretario general de acuerdos dio cuenta de lo siguiente:

I. APROBACIÓN DE ACTA

Se sometió a consideración el proyecto de acta de la sesión pública número tres ordinaria, celebrada el martes siete de enero de dos mil catorce.

Por unanimidad de once votos el Tribunal Pleno aprobó dicho proyecto.

II. VISTA Y RESOLUCIÓN DE ASUNTOS

Asuntos de la Lista Oficial para la Sesión Pública Ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el jueves nueve de enero de dos mil catorce:

I. 32/2012

Acción de inconstitucionalidad 32/2012, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril de dos mil doce. En el proyecto formulado por la señora Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos se propuso: *“PRIMERO. Es procedente pero infundada la presente acción de inconstitucionalidad. SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales; 16, fracción I, apartado D, y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones. TERCERO. Publíquese esta ejecutoria en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.”*

La señora Ministra ponente Luna Ramos realizó la presentación del proyecto, indicando que los tres dispositivos impugnados permiten, tratándose de las averiguaciones previas en materia de delincuencia organizada, de delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, que el Procurador General de la República o los servidores públicos en quienes delegue la facultad podrán solicitar, por oficio o medios electrónicos, a los concesionarios o permisionarios del servicio de telecomunicaciones la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil

asociados a una línea que se encuentren relacionados; que los concesionarios están obligados a colaborar con las autoridades en la localización geográfica en tiempo real de estos aparatos y que las licitaciones en las que estos concesionarios participen deberán hacer propuestas para lograr una mayor coordinación con las autoridades para estas localizaciones y dar un mejor servicio en estas solicitudes que pueda llevar a cabo la autoridad investigadora, en atención a que se trata de delitos que están siendo investigados de una gravedad realmente impactante.

Añadió que el señor Ministro Cossío Díaz le formuló una observación en cuanto a la legitimación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual contiene algunos precedentes del Tribunal Pleno, las cuales adicionará al proyecto.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación el apartado procesal de la propuesta modificada del proyecto, contenida en los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, la oportunidad y la legitimación, la cual se aprobó en forma económica por unanimidad de once votos.

La señora Ministra ponente Luna Ramos expuso las razones del considerando cuarto del proyecto, relativo a las dos causas de improcedencia hechas valer: falta de legitimación activa y extemporaneidad.

Respecto de la primera, relacionada con que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no tiene legitimación para interponer esta acción de inconstitucionalidad porque el artículo 16, fracción I, apartado D, de la Ley Federal de Telecomunicaciones no se está refiriendo a derechos humanos, señaló que se desestimó puesto que se tiene que analizar su contenido, lo cual implica el análisis de fondo, de acuerdo con la tesis del Tribunal Pleno relativa.

En cuanto a la segunda, relacionada con la extemporaneidad de la acción de inconstitucionalidad, argumentando que dicho artículo no ha sufrido ninguna variación desde el punto de vista legislativo porque se suprimió el registro de personas relacionadas con la telefonía celular y, por tanto, únicamente se adaptó la redacción del artículo, indicó que también se desestimó porque, de acuerdo al criterio mayoritario del Tribunal Pleno, cualquier modificación, aun cuando se trate de textos prácticamente similares, si está precedida de un proceso legislativo y se publica, se entiende como un acto legislativo nuevo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a examen del Tribunal Pleno el considerando cuarto del proyecto relativo a las causas de improcedencia.

El señor Ministro Cossío Díaz manifestó no coincidir con la argumentación dada a la segunda causal pues, de acuerdo el criterio minoritario del Pleno que comparte, se

requiere una modificación de alguna importancia o sustantividad, para efectos de considerarlo como acto legislativo nuevo. Por ello, se separó de los razonamientos, aunque arribando al mismo resultado.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena se adhirió a lo expresado por el señor Ministro Cossío Díaz, ya que la naturaleza de una norma no se desprende de la sintaxis, sino de la semántica y, por ello, no existe un nuevo acto legislativo.

El señor Ministro Franco González Salas participó en el sentido de que el nuevo acto legislativo se presenta con la reforma al texto que modifique el sentido o alcance al sistema o subsistema jurídico al que pertenece, aun cuando no haya modificación directa al artículo sino al sistema o subsistema, pues toma un alcance o sentido diferente. Por esto, se mostró en contra del proyecto.

El señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea se manifestó de acuerdo con el proyecto porque el cambio legislativo se da en el sentido normativo, lo que en el caso sucede al quitar el citado registro.

El señor Ministro Aguilar Morales también se mostró de acuerdo con el proyecto porque la adaptación misma y reforma al artículo, aun sólo suprimiendo alguna de sus partes, se considera un nuevo acto legislativo.

El señor Ministro Presidente Silva Meza sometió a votación la propuesta del proyecto, contenida en el

considerando cuarto relativo a la causal de improcedencia por falta de legitimación activa, la cual se aprobó por unanimidad de once votos.

Acto continuo, sometió a votación la propuesta del proyecto, contenida en el considerando cuarto relativo a la causal de improcedencia por extemporaneidad, la cual se aprobó por mayoría de siete votos de los señores Ministros Luna Ramos, Zaldívar Lelo de Larrea, Pardo Rebolledo, Aguilar Morales, Valls Hernández, Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, Cossío Díaz, Franco González Salas y Sánchez Cordero de García Villegas votaron en contra.

La señora Ministra ponente Luna Ramos presentó los argumentos que sostienen el considerando quinto del proyecto, relativo al estudio del primer concepto de invalidez, el cual, según la promovente, los artículos combatidos violan el derecho humano a la privacidad o a la vida privada y las garantías de legalidad y seguridad jurídica, así como que violan los artículos 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, porque se otorgan facultades discrecionales e ilimitadas al Procurador General de la República y a los procuradores de las entidades federativas sin mediar mandamiento escrito de autoridad judicial que funde y motive la causa legal para ordenar la localización geográfica de una persona en tiempo real; además de ser normas de carácter

abierto, porque omiten establecer alcances, límites y responsabilidades de las autoridades facultadas para solicitar esta localización a los concesionarios, lo que puede constituir un registro exhaustivo y preciso de los movimientos públicos, revelando detalles de su vida personal, familiar, religiosa, política y social, esto es, una herramienta en la investigación susceptible de abusos y arbitrariedades.

Además, la promovente añadió que las normas carecen de tres principios fundamentales: primero, se está excluyendo a la autoridad judicial para realizar la localización geográfica; segundo, no están precisados los sujetos destinatarios de la medida, de modo que un tercero no sospechoso en la investigación pudiera estar sujeto a la vigilancia; y tercero, que no cuenta con un límite temporal.

Delimitó que en el proyecto se contesta a estos argumentos a partir del análisis de lo que esta Suprema Corte ha definido como vida privada o privacidad, estimando que la solicitud del Procurador General de la República se contrae a la localización de equipos celulares, esto es, una terminal móvil asociada a una línea telefónica determinada, definida como tal en el artículo 3, fracción XVII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, relacionada con investigaciones derivadas de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestros, extorsión o amenazas, y no así a las personas en sí. Precisó que no se intervienen las comunicaciones realizadas a través de tales equipos ni el registro de llamadas, aunque se puede identificar a la

persona que detenta el equipo y determinar las medidas que, en su caso, procedan.

Citó la importancia de este principio de inmediatez y lo distinguió de un segundo momento en la averiguación previa en la cual, ya localizado el equipo involucrado con los ilícitos citados y de los que el Ministerio Público correspondiente considere necesaria una intervención a las comunicaciones privadas, deberá solicitarse por escrito al juez de distrito la misma, expresando el objeto, necesidades, indicios, hechos, circunstancias, datos y demás elementos que se pretendan probar. Las solicitudes deberán indicar, además, la persona investigada, el lugar donde se realizará la intervención, su duración, procedimiento y equipos a utilizar y, en su caso, la persona a cuyo cargo estará la prestación del servicio. Por ello, indicó que no se trata de una facultad totalmente arbitraria, pues le reviste ciertas formalidades por parte de las autoridades determinadas por el artículo 8, fracción II, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con los artículos 23 y 24 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Retomó la importancia de la inmediatez y celeridad en la medida de geo localización, pues de lo contrario haría nugatoria prácticamente la posibilidad de la localización de la fuente de este tipo de amenazas, realizando una analogía con las visitas intencionadas a investigar la entrega de comprobantes fiscales.

En relación con la obligación de los concesionarios de atender las solicitudes formuladas por la autoridad, de acuerdo con los artículos 21 y 102, apartado A, de la Constitución Federal y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Penales, la ubicación del lugar proveniente de las llamadas se inserta en las actividades propias de la investigación que la ley confiere al agente del Ministerio Público, con la sola particularidad de que se emplean nuevas tecnologías de las telecomunicaciones para salvaguardar el orden público, la paz social, la tutela del derecho a la vida, así como la integridad física y psicológica de las personas, lo que justifica plenamente esta facultad.

Argumentó que, de sostenerse que la medida citada implica una invasión a la vida privada, entonces todas las cámaras de video vigilancia también lo harían, pues son medios tecnológicos que facilitan la averiguación de los delitos, lo que conlleva a otorgar seguridad jurídica, paz y bienestar sociales.

Por lo que respecta al límite temporal de la medida, adujo que, si bien es cierto el artículo relativo no la establece, de la interpretación sistemática se extrae que se agota en el momento en que termina la localización del aparato en cuestión.

Finalmente, dio lectura a la exposición de motivos de la adición del artículo 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales, la cual estableció que obedece a la existencia de circunstancias de apremio desbordante para

prevenir una situación de hecho que constantemente transgrede el orden público, la paz y la tranquilidad de los mexicanos, con lo que se busca consolidar un marco legal que permita al Estado mexicano investigar con mayor eficacia en tiempo real estos delitos con la intención de proceder a la aprehensión de los responsables y, lo que es más importante, localizar y rescatar con vida a las víctimas. Con esto, al perseguirse un fin legítimo, los artículos impugnados no contravienen la Constitución General ni los dispositivos internacionales invocados.

El señor Ministro Cossío Díaz se manifestó en contra del proyecto, pues no se debe permitir una intromisión en la vida privada de las personas sin existir un fundamento expreso en la Constitución Federal, por lo que las consideraciones relativas a la finalidad legítima y a la razonabilidad o proporcionalidad de la medida no son suficientes para declarar la validez de los artículos materia de la litis.

Consideró que el proyecto se basa en que no se trata de actos privativos, sino de molestia, porque la investigación ministerial y la autorización para la localización de equipos móviles no priva de manera definitiva los derechos de los gobernados; distinción que no estima aplicable, pues se trata de una acción abstracta de inconstitucionalidad, donde la naturaleza del acto y sus alcances en un caso concreto no trascienden al análisis de la norma en su contraste directo con la Constitución, sino que debe estudiarse la potencial

afectación a un derecho humano y su posible justificación constitucional.

Partiendo de lo anterior, si bien es cierto que el artículo 21 constitucional faculta genéricamente la investigación de delitos, también es cierto que esta atribución no puede irrumpir en el ámbito de derechos del individuo sin que exista supuesto expreso en la Constitución, como sucede con los cateos o la intervención de comunicaciones privadas.

Valoró que lo que debió haberse justificado por el legislador ordinario, en la exposición de motivos y en el texto de la norma o su interpretación sistemática, es que la facultad otorgada al Procurador General de la república cumple con la exigencia general de la Constitución de someter los actos de investigación ministerial, específicamente establecidos en la Norma Suprema o por extensión, a control judicial, ya que estas medidas tienen la consecuencia natural de afectar el ejercicio de los derechos de los gobernados, como en el caso de los cateos domiciliarios y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas.

Concluyó que todo acto que pueda considerarse, por extensión, como facultad constitucional de investigación de las procuradurías debe tener como salvaguarda mínima el control judicial previo, por lo que no puede soslayarse esto mediante una consideración de razonabilidad o ponderación porque la irrupción o limitación del derecho de la privacidad, cuando no está expresamente establecida en la

Constitución, sino que se considera posible por extensión de las facultades existentes, no deviene constitucional, por lo que una norma ordinaria que se sobrepone al sistema de derechos y facultades que la Constitución reconoce y pretende hacer operativas y eficaces no es constitucional si la misma no cuenta con un control mínimo para evitar su uso indiscriminado por parte de la autoridad persecutora; ello, aclaró, sin dejar de ser sensible a las condiciones sociales y de seguridad fácticas del Estado mexicano.

El señor Ministro Valls Hernández se manifestó en contra de la propuesta del proyecto porque la medida, si bien persigue un fin legítimo, se encuadra en la vigilancia de comunicaciones, dado que un equipo móvil está relacionado a una persona, por lo que la localización geográfica de aquél implica la obtención de información acerca de ésta, lo que infringe los derechos a la intimidad y vida privada protegidos por el artículo 16 constitucional en el sentido amplio de inviolabilidad de comunicaciones, siendo la ubicación de donde se emite una comunicación un dato de la misma y, por ende, su acceso se permite sólo en casos excepcionales y siempre mediante escrutinio judicial.

Indicó que es lamentable la situación delictiva de nuestro país, pero que toda actuación de la autoridad investigadora que pueda tener injerencia en los derechos humanos, conforme al marco constitucional y convencional, debe garantizarse su uso correcto y no arbitrario a través del control judicial por medio de una solicitud escrita en la cual la

autoridad investigadora funde y motive la localización de un equipo móvil, principalmente tratándose de la intimidad y la vida privada.

Precisó que, en muchas ocasiones, se trata de situaciones que requieren la intervención pronta de las autoridades, mas no justifica que las procuradurías actúen discrecionalmente y sin contrapeso institucional, lo cual permitiría el uso indebido de la medida, sino que se debe limitar por control judicial.

Por esta misma razón, también se manifestó en contra de la obligación de los concesionarios y permisionarios de servicios de telecomunicaciones a colaborar con las autoridades investigadoras, ya que se debe autorizar vía judicial para no dejarse al arbitrio de las procuradurías.

El señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena coincidió con la conclusión del proyecto, el cual responde tres preguntas distintas: primera, si existe violación al derecho general a la intimidad o privacidad; segunda, si existe violación al principio de legalidad por falta de elementos necesarios, como la participación de la autoridad judicial y una delimitación de los ámbitos temporal y personal de la facultad; y tercera, si existe una violación al principio de legalidad por falta de delimitación de los delitos cuya investigación permite la autorización de la facultad. Aclaró que las premisas del proyecto son incompletas a fin de establecer un estándar de escrutinio constitucional.

Puntualizó que la premisa general del proyecto es que la finalidad del derecho a la privacidad o intimidad es el respeto a un ámbito de vida privada personal y familiar que, por regla general, queda excluido del conocimiento ajeno, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 16 constitucional. Esta protección a la privacidad se manifiesta en otros preceptos constitucionales que resulta necesario considerar, pues aprecian distintas condiciones de aplicación, a saber, el derecho a la procreación del artículo 4, el de asociación del artículo 9, el de la protección del goce de bienes, posesiones y libertades mediante el debido proceso del artículo 14, así como la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones en los párrafos once y doce del artículo 16; también se debe contemplar el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece la protección de la honra y la dignidad tutelando la privacidad.

Por ello, ante la indefinición en el proyecto de qué tipo de privacidad es la que se pone en peligro con las normas impugnadas, puesto que existe un escrutinio constitucional estricto del Estado para permitir su injerencia arbitraria, la premisa con la cual desarrolla el argumento debe completarse para establecer que la intimidad sobre la que versan las normas analizadas está relacionada con las comunicaciones de las personas y la fuente de la violación se identifica con la actividad propia del Estado en el contexto de la investigación de una actividad criminal y, por tanto, las condiciones de aplicación del derecho a la intimidad son las que regulan los instrumentos de investigación ministerial

para la persecución de los delitos, siendo que el artículo 16 establece un derecho contra los actos de molestia, para que sean emitidos por autoridad competente que funde y motive la causa legal.

Indicó que en otro apartado del mismo precepto se establece que las comunicaciones y los domicilios y objetos son inviolables y que sólo mediante una orden judicial se pueden intervenir, si se satisfacen ciertas condiciones, como son acreditar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida, con lo cual la Constitución prevé la protección *prima facie* del contenido de dichas comunicaciones para evitar injerencias arbitrarias e injustificadas. De no existir una expectativa de privacidad legítima, el estándar de escrutinio constitucional se limita al exigido a un acto de molestia.

Estimó que la premisa interpretativa es que la Constitución protege a las personas y no a los lugares, esto es, la protección de las comunicaciones y domicilios es indirecta, por ello se requiere determinar si existe una expectativa de privacidad legítima para establecer cuáles son las condiciones de aplicación del derecho de privacidad o intimidad y, por tanto, basta acreditar que la autoridad pretende acceder a esta área de protección para concluir que debe cumplir con las respectivas garantías para la emisión de una orden judicial; sin embargo, en el caso de las comunicaciones privadas la perspectiva varía, pues atendiendo nuevamente a los contextos de las posibilidades de injerencias, debe considerarse que los contenidos de las

comunicaciones privadas son inviolables, dado que ahí se genera una nítida expectativa legítima de privacidad, mientras que, tratándose de la actividad comunicativa, se requiere de una precisión contextual ya que, si se realiza dicha actividad en espacios protegidos, es claro que la expectativa de privacidad se presupone, pero cuando se realiza en un contexto público, es relevante determinar las formas en que esas expectativas se pueden generar de manera legítima, en tanto que pueden existir aspectos en los que las personas no esperen razonablemente que su actividad sea mantenida al margen del conocimiento público, en la inteligencia de que para determinar si se constata una expectativa de privacidad legítima, se requiere determinar si las expectativas subjetivas de los individuos, de mantener algo como privado, se pueden calificar como razonables y justificadas por las circunstancias en un Estado democrático de derecho.

Concluyó que la facultad otorgada al Ministerio Público de las normas impugnadas, esto es, la localización geográfica en tiempo real de los equipos móviles de comunicación, pertenece a un ámbito en el cual no cabe la existencia de una expectativa legítima de privacidad.

Además, se apartó del argumento del proyecto inherente al análisis constitucional de las facultades de investigación del Ministerio Público para la persecución de los delitos, el cual concluye que la ubicación del lugar en que se origina una llamada desde un equipo móvil de

comunicación pertenece a las actividades y diligencias propias de ese órgano, con la particularidad de que para ello emplea nuevas tecnologías en materia de comunicaciones con las cuales cuentan los concesionarios o permisionarios, para facilitar y hacer más eficaz la persecución del delito; manifestó que se debe matizar en el sentido de reconocer, como punto inicial, que estas tecnologías amplían las posibilidades de privacidad de las personas, pues comúnmente se instrumentan para el desenvolvimiento de la vida cotidiana, por lo que existe una relación directa de proporcionalidad entre el avance tecnológico y la generación de expectativas de privacidad legítima.

Por lo anterior, concluyó que, en primer lugar, la medida de localización geográfica no tiene como efecto principal ni incidental el acceder a los contenidos de las conversaciones y, en segundo lugar, no identifica específicamente a una persona, sino a un equipo que puede estar relacionado con la comisión de un delito, ya que la señal no se obtiene mediante el acceso a un lugar protegido constitucionalmente, sino del registro de un dato generado en la infraestructura de las telecomunicaciones.

Del mismo modo, contempló tres razones adicionales. Primero, que las señales de ubicación que envía un equipo móvil forman parte de la información disponible para los permisionarios o concesionarios para propósitos comerciales, diferente a los contenidos de las conversaciones, lo que presupone que esta ubicación es

conocida para contabilizar, en alguna forma, las llamadas y distintos servicios. Segundo, que las señales de ubicación también forman parte de la regulación del Estado, de acuerdo con el artículo 27 constitucional, el cual otorga facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones para la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que esa señal de identificación no resulta de conocimiento privado de quien lo usa. Y tercero, realizó una analogía relativa a que las redes de telecomunicaciones son las autopistas del siglo XXI, por lo que si no se ha considerado que la identificación de las placas de los automóviles o demás rasgos de una unidad por parte del agente policiaco equivale a entrometerse en el espacio expectativa de privacidad, no existe razón para afirmar lo contrario, tomando en cuenta lo establecido en el Tribunal Pleno a través de la jurisprudencia 65/2007 de rubro *“ESPECTRO RADIOELÉCTRICO. FORMA PARTE DEL ESPACIO AÉREO, QUE CONSTITUYE UN BIEN NACIONAL DE USO COMÚN SUJETO AL RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, PARA CUYO APROVECHAMIENTO ESPECIAL SE REQUIERE CONCESIÓN, AUTORIZACIÓN O PERMISO”*.

Indicó que, al no existir una expectativa de privacidad legítima, en la ubicación del equipo de comunicación móvil no debe exigirse autorización judicial, pues el artículo 16 constitucional sólo exige que la autorización del instrumento

de investigación no sea arbitrario, bastando con que se funde y motive la causa legal, así como que sea emitido por autoridad competente.

En adición, estimó que el acto de identificación no es necesario notificarlo al usuario del equipo móvil, porque ese acto de molestia se perfecciona hasta que trascienda realmente en la esfera jurídica de las personas, es decir, cuando esa información es utilizada al interior de una investigación ministerial, en términos de las garantías de los imputados contenidas en el apartado B del artículo 20 de la Constitución General.

Finalmente, expresó su coincidencia con el proyecto, aunque por razones distintas, debiéndose precisar que la facultad para solicitar la identificación de los equipos móviles está condicionada a los requisitos de razonabilidad y pertenencia, lo que implica realizar una interpretación conforme de las normas ante lo cual, en su momento, podrá determinarse si se usó indebidamente la medida o si se trata de una prueba ilícita para efectos de otorgar valor probatorio en un proceso penal.

Aclaró que su posición se limita a lo expuesto, mas ello no implica la evaluación constitucional de la utilización por parte de las autoridades ministeriales o policiacas de equipos o tecnologías que permitan la generación de un expediente para vigilar a las personas en sus movimientos públicos que refleje detalles de su vida familiar, política, profesional, religiosa o sexual. En esos casos futuros, la

Suprema Corte deberá analizar con visión integral la expectativa de privacidad legítima correspondiente y aplicar un escrutinio estricto para verificar la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida.

El señor Ministro Presidente Silva Meza decretó un receso a las trece horas con diez minutos y reanudó la sesión a las trece horas con treinta minutos.

El señor Ministro Pardo Rebolledo consideró que si se analiza la medida cuestionada en lo general, es decir, descontextualizada, se podría establecer que es excesiva y atentatoria de algunos derechos humanos; sin embargo, debe atenderse el contexto concerniente a que se está proporcionando a la autoridad persecutora la investigación de hechos probablemente delictuosos utilizando el avance tecnológico que se puso a disposición de las concesionarias que permite localizar los aparatos telefónicos a través de la red de telecomunicación, buscando un mejor ejercicio de las responsabilidades asignadas relativas a la procuración de justicia.

Consideró que esta medida, como cualquier otra, puede en la práctica ser objeto de excesos al quedar a discreción su utilización, pero que estos usos indebidos no tienen influencia sobre su constitucionalidad, pues resulta valiosa para el trabajo de las autoridades ministeriales atendiendo al principio de oportunidad en la investigación y persecución de los delitos, así como en la localización de los responsables.

Puntualizó tener una diferencia con el proyecto, el cual distingue radicalmente entre localizar personas y localizar un aparato de telecomunicación, pues ambas cosas están vinculadas, aunque estimó acertada la diferencia entre localizar un teléfono e intervenir una comunicación telefónica y las distintas etapas de la investigación, las cuales son, en primer lugar, localizar el aparato, para lo cual no se requeriría autorización judicial y, en segundo lugar, intervenir sus comunicaciones o incluso ingresar al lugar en donde se encuentra, en cuyo caso se tendrían que aplicar los requisitos constitucionales y legales.

Consideró que la medida es restrictiva de algunos derechos humanos de privacidad e intimidad, aunque pasa el test de proporcionalidad en el contexto de una averiguación previa que investigue un delito y en la localización de un delincuente, pues la afectación al derecho humano de determinada persona no puede prevalecer sobre el interés público, tomando en cuenta que se aportarán elementos valiosos al Ministerio Público para la investigación del delito, además de que la localización no implica necesariamente la afectación de otros derechos, como son la inviolabilidad del domicilio o la privacidad en las comunicaciones privadas.

Más allá de la colisión entre diversos derechos humanos, se deben contemplar los derechos de una víctima o los familiares de una víctima, quienes tienen la expectativa de que el Ministerio Público haga uso de los avances

tecnológicos para localizar a los responsables de los hechos delictivos.

Aclaró que la medida no está exenta de los requisitos que deben revestir a todo acto de autoridad de acuerdo con la Constitución y que sólo atenderán a los delitos especificados en la norma impugnada, esto es, contra la salud, secuestro, extorsión y amenazas, lo cual implica que habrá momentos en los que se presente la flagrancia y, por ende, la necesidad de actuar urgentemente para evitar la comisión de uno o varios delitos; en todo caso, se señalan sanciones para quien utilice la medida y la información obtenida para fines distintos a los previstos en la ley.

Concluyó que la medida se justifica en el ámbito de las facultades concedidas al Ministerio Público, previstas en los artículos 21 y 102 de la Constitución Federal, aprovechando los avances tecnológicos en beneficio de la investigación de un delito y la localización de los probables responsables de su comisión.

Por estas razones, se mostró conforme con el proyecto con las diferencias especificadas.

El señor Ministro Pérez Dayán se manifestó en favor del proyecto y la mayoría de sus consideraciones, aunque con algunas precisiones.

Recapituló que el proyecto examina los artículos 14 y 16 constitucionales para realizar la diferenciación respecto de los actos de privación para concluir que el artículo 14 no

es aplicable, pues la medida estudiada no priva de un derecho. Luego, examina el acto típico de molestia con base en la jurisprudencia de la Segunda Sala, en la cual se privilegia el derecho a la privacidad contenida en el artículo 16 constitucional ante un acto de molestia.

Coincidió en que no se trata de la geo localización de una persona, sino de una llamada como herramienta de investigación para el Ministerio Público en el alcance de sus objetivos, por lo que se asocia a las facultades previstas por el artículo 21 constitucional, no así al artículo 16, cuyo contenido está referido al acto de molestia de una persona. Por esta razón, hizo una analogía al rastreo de una cuenta bancaria, de un automóvil o a un inmueble, en los cuales el Ministerio Público investiga fundando y motivando cada solicitud de información para el éxito de su investigación, no en función del derecho humano de una persona. Concluyó que no se trata de un acto de molestia contra alguien y, por tanto, no se deben cumplir con todos los requisitos del artículo 16 constitucional.

Añadió que los artículos combatidos que prevén la medida establecen sus correspondientes límites legales, por lo que se cumple con el estándar de seguridad jurídica.

El señor Ministro Presidente Silva Meza levantó la sesión a las catorce horas, previa convocatoria que emitió a los integrantes del Pleno para acudir a la próxima sesión pública ordinaria del día lunes trece de enero de dos mil catorce, a la hora de costumbre.

Sesión Pública Núm. 4

Jueves 9 de enero de 2014

Firman esta acta el señor Ministro Presidente Juan N. Silva Meza y el licenciado Rafael Coello Cetina, secretario general de acuerdos, quien da fe.